PROPOSICIÓN DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES, A EFECTO DE PRESENTAR PARA LA APROBACIÓN DEL PLENO, UN ACUERDO PARA INTEGRAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR SI LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL DE DIRECTOR GENERAL A SECRETARIO DE ESTADO DEL GOBIERNO FEDERAL, ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA DEL SARS-COV-2, CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD DE COVID-19, SE HAN DESEMPEÑADO CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LAS LEYES APLICABLES, EN ESPECIAL, EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y PARA EL CASO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE SALUD, SI HAN CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Sen. Eduardo Ramírez Aguilar

Presidente de la Mesa Directiva

H. Cámara de Senadores

Presente.

Los suscritos, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con **Punto de Acuerdo de urgente resolución** por el que se exhorta respetuosamente a la **Junta de Coordinación Política de esta Cámara a realizar las gestiones conducentes a efecto de presentar a la brevedad, para la aprobación del Pleno, un acuerdo para integrar una Comisión Especial que tenga como propósito investigar si los servidores públicos de nivel de Director General a Secretario de Estado del gobierno federal, encargados de la gestión de la pandemia del SARS-COV-02, causante de la enfermedad de COVID-19, se han desempeñado conforme a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las leyes aplicables, en especial, en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y para el caso de los funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Salud, si han cumplido con las disposiciones de la Ley General de Salud.** Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo cuarto de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, condición entendida como el estado integral de bienestar físico, mental y social al que aspiran todos los seres humanos.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección de la salud a la población, a través de la garantía al acceso adecuado a servicios de salud que ofrece el sistema público.

Sin embargo, es un hecho innegable que la pandemia por el coronavirus SARS-COV-02, causante de la enfermedad del COVID-19, reveló la incapacidad del gobierno federal para garantizar el derecho humano a la protección de la salud de las y los mexicanos.

El fracaso de la estrategia del gobierno federal para proteger la salud y preservar la vida de las y los mexicanos, queda de manifiesto ante la abrumadora realidad:

- Más de 170 mil mexicanas y mexicanos muertos por COVID-19, incluyendo a más de 2 mil seiscientos profesionales de la salud, que dieron su vida en la primera línea de defensa contra el letal virus. Estas son las cifras oficiales, ya que los estudios referentes al exceso de muertes en 2020 apuntan que el número total de decesos por la pandemia es mayor.
- México es el tercer país con más muertes por COVID-19 a nivel mundial.
- Tenemos la tasa de letalidad más alta del mundo (defunciones/contagiados), 8.6 contra 2.2 promedio mundial.

Sin duda alguna, somos testigos del más grande fracaso de una política social en la historia de México. El gobierno federal incurrió en graves omisiones y acciones ineficaces que provocaron que la pandemia adquiriera el nivel de catástrofe, fallando en todos sus pronósticos sobre la mortandad esperada.

El que desde un principio el gobierno federal minimizara la pandemia, ocasionó que la misma se saliera de control, con los resultados funestos que hoy tenemos.

Además, el gobierno federal desoyó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para contener el avance del virus, como el uso obligatorio de cubrebocas y la realización masiva de pruebas para detectar, rastrear y aislar casos, y cortar la cadena de contagios.

La secuela trágica que dejan las omisiones y los errores de la política del gobierno federal para atender la emergencia sanitaria marcarán a esta generación de mexicanas y mexicanos.

A la par de la dolorosa pérdida de vidas humana, la reducción del bienestar de millones de personas se suma a las consecuencias por la fallida política federal.

El cierre prolongado de la actividad económica por la pandemia provocó la pérdida de millones de empleos y el cierre de miles de fuentes de trabajo. Más de un millón de empleos formales se perdieron, empleos con prestaciones sociales.

La incipiente reactivación de la economía mexicana vislumbra un panorama poco prometedor: No se han recuperado la totalidad de los empleos formales perdidos, se ha incrementado la subocupación laboral y ha aumentado la ocupación informal que carece de seguridad social.

Al tercer trimestre de 2020, la pobreza laboral en el país se elevó a 44.5%, es decir, cerca de la mitad de las personas que trabajan no les alcanzó con sus ingresos laborales para adquirir la canasta alimentaria, esto representa 11.6 millones de personas más respecto al primer trimestre de 2020.

A pesar de este escenario, el gobierno federal fue a contracorriente de las recomendaciones de organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para las Naciones Unidas (ONU), de realizar transferencias monetarias extraordinarias a los trabajadores que sufrieron una reducción en sus ingresos.

Esta inacción de parte del gobierno federal tendrá graves consecuencias. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ha estimado en cerca de 10 millones el número de personas que engrosarán las filas de la pobreza y un número similar caerán en la pobreza extrema, ante la falta de una política social que ayude a mitigar los efectos de las crisis económica y sanitaria.

Los avances alcanzados en el combate a la pobreza en los últimos años, se irán por la borda debido a la falta de una política social solidaria en estos momentos difíciles.

En el Grupo Parlamentario del PAN pensamos que esto no se puede quedar así, que no se puede quedar en minutos de silencio y condolencias a los familiares de las víctimas.

Las decisiones y acciones tomadas por los servidores públicos provocaron efectos sociales que deben generar responsabilidades, máxime si esos efectos se tradujeron en la pérdida de vidas humanas.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 7 que los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su cargo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

Adicionalmente, define una serie de directrices que deberán observar los servidores públicos para la efectiva aplicación de los citados principios, entre los cuales destacan los siguientes:

- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su cargo.
- Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.
- Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución.
- Tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, preservando el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general.

Si los servidores públicos se apartan de estos mandatos serán sujetos de responsabilidades.

Consideramos que es imprescindible investigar la actuación de los servidores públicos, a la luz de lo que mandata la ley, para deslindar las posibles responsabilidades en que hayan incurrido los funcionarios de alto nivel que están a cargo de la pandemia por parte del gobierno federal, para que, en su caso, respondan y enfrenten la justicia.

Más aún, en el caso de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud, es indispensable determinar si todas sus acciones se implementaron en apego a las disposiciones de la Ley General de Salud que, por cierto, incluye un capítulo sobre Vacunación. No obstante, conviene tener presente que funcionarios de las Secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, y otras, han estado al frente de decisiones relevantes sobre distintos aspectos del manejo de la pandemia.

Solo para poner un ejemplo, podríamos señalar que en tanto en nuestro país se han vacunado solamente 750 mil personas en los últimos 50 días, en países como Chile, se ha vacunado a más de un millón de personas en tan solo una semana. En definitiva algo se está haciendo muy mal en nuestro país, y el pueblo necesita saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo.

Hay que decirlo claramente. Este no es asunto de venganzas o lucrar políticamente con la pandemia, este es un asunto de rendición de cuentas, de transparencia y de justicia para millones de mexicanas y mexicanos.

La propuesta que hoy ponemos a consideración de las y los Senadores se inserta en lo que se conoce como el derecho a la verdad, que surge ante la necesidad de investigar posibles casos graves de violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos. El derecho a la verdad es combatir la impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la verdad comprende el reconocimiento del derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos.

Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos de graves violaciones de derechos humanos, así como,

dependiendo de las circunstancias de cada caso, garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales. [*]

En este sentido, es importante tener en cuenta que de los hallazgos a los que llegare la Comisión Especial que estamos proponiendo, pudieran derivarse diversas responsabilidades, no solo de carácter administrativo, sino también, quizá, de carácter penal e incluso de carácter político.

Por esta razón, la Comisión Especial, deberá presentar un informe a la brevedad posible, en el que recomiende las medidas a tomar al respecto, ya sea la presentación de denuncias ante la instancia que corresponda de la Secretaría de la Función Pública para el caso de la responsabilidad administrativa, o ante la Fiscalía General de la República para el caso de que detectare una posible responsabilidad penal.

Así mismo, si derivado de sus actuaciones, la Comisión encuentra que alguna o algunas de las personas servidoras públicas involucradas en la atención de la pandemia han incurrido en faltas u omisiones que han redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, la Comisión habrá de considerar la presentación de una denuncia de responsabilidad política a efecto de que, en términos de lo dispuesto al respecto por nuestra Carta Magna, se sujete a juicio político a la o las responsables.

La Comisión en comento, valorará igualmente, en caso de encontrar que las autoridades correspondientes han provocado, por acción u omisión, violaciones graves a los derechos humanos, acudir a instancias tanto nacionales como internacionales, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde luego, en virtud de que son muchas las autoridades involucradas en la atención de la pandemia, la Comisión podrá sugerir o implementar diversas acciones, es decir, una combinación de denuncias de responsabilidad administrativa, penal o política, y/o por violaciones de derechos humanos, ante instancias nacionales y/o internacionales.

Así mismo, podrá presentar recomendaciones de mejora en relación con los distintos procesos vinculados a la atención de la pandemia, ya sea en materia de atención a enfermos, o a sus familiares, o para su rehabilitación, o bien para efectos del plan nacional de vacunación, o para mejorar las medidas sanitarias de contención de la pandemia, o para la recuperación económica del país.

El integrar una Comisión Especial en este Senado de la República constituirá un espacio para reconstruir la actual narrativa pública y construir la verdad sobre el manejo de la pandemia, a través de la participación de las diversas voces, desde las familias de las víctimas, pasando por los servidores públicos involucrados, hasta la opinión de expertos y especialistas, investigando con objetividad e imparcialidad lo ocurrido.

La creación de la Comisión Especial desde el Poder Legislativo es un auténtico mecanismo democrático, que atiende a la división de poderes y a la necesaria independencia en la investigación.

La Constitución Política establece en su artículo 93 que: “Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 85 que la Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones, siendo una de estas modalidades la de investigación.

El Reglamento de este Senado de la República en su artículo 119 define que las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones y que también se crean para conocer exclusivamente de una materia o

desempeñar un encargo específico. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política.

En este Senado han fracasado los intentos por darle seguimiento a la actuación del gobierno federal durante la actual crisis sanitaria y económica. El Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del virus COVID-19 creado en marzo de 2020 no ha realizado sus funciones, por el permanente bloqueo de la mayoría parlamentaria.

Hoy apelamos a que las y los Senadores de la mayoría se conduzcan conforme a los principios y directrices que debemos observar como servidores públicos y se sumen y aprueben la creación de la Comisión Especial que se propone. Su deber es estar del lado del interés y bienestar de las y los mexicanos, y no de sus intereses de grupo, su deber es estar del lado de la protección de los derechos humanos de todos.

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente Punto de Acuerdo para exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a realizar las gestiones conducentes a efecto de presentar a la brevedad, para la aprobación del Pleno, un acuerdo para integrar una Comisión Especial que tenga como propósito investigar si los servidores públicos de nivel de Director General a Secretario de Estado del gobierno federal, encargados de la gestión de la pandemia por SARS-COV-02 causante de la enfermedad de COVID-19, se han desempeñado conforme a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las leyes aplicables, en especial, en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y para el caso de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud si se condujeron en apego a las disposiciones de la Ley General de Salud.

Los ejemplos internacionales sobre este caso son numerosos. En primer lugar, se destaca la creación del Panel independiente que la Organización Mundial de la Salud creó para investigar cómo el organismo manejó los anuncios de la pandemia, así como el establecimiento de otro Panel de expertos para investigar en China el inicio de la pandemia y el manejo que ese país en concreto hizo de la emergencia durante los primeros meses de 2020.

Otro ejemplo interesante es el de la Comisión de la Verdad que han establecido las autoridades de la región de Lombardía, en Italia, desde octubre del año pasado para evaluar la actuación de las autoridades de salud tanto del gobierno local como del gobierno central. Luego de una investigación cuyos resultados se presentarán en octubre de este año, la Comisión rendirá un informe que servirá, en su caso, para fincar responsabilidades civiles, administrativas o aún penales. Además, el informe pretende esclarecer las medidas, que aún asumidas de buena fe, no deberán volver a adoptarse en el escenario de una próxima pandemia.

En Corea del Sur, la Comisión de los Derechos Humanos investiga en este momento la respuesta del gobierno a la pandemia y en Australia, el Senado de ese país estableció un Comité precisamente para investigar y dar seguimiento a la respuesta del gobierno a la pandemia. Comités y Comisiones similares se han establecido ya al interior del Parlamento británico, del Parlamento neozelandés, en forma de Subcomité en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y en el Parlamento de Kenia, así como en forma de un Comité especial bicameral en el Parlamento pakistaní. En la Cámara de Diputados de Chile se instaló también una Comisión especial investigadora sobre las medidas tomadas por el gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales. Algo semejante ha ocurrido ya en el Congreso argentino y en el peruano.

Como podemos observar, la gente espera investigación, rendición de cuentas y, lo más importante, justicia. Muchas de estas Comisiones creadas en distintos países del mundo, responden a ese clamor popular.

Por todo lo antes expuesto, el suscrito somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a realizar las gestiones conducentes a efecto de presentar a la brevedad, para la aprobación del

Pleno, un acuerdo para integrar una Comisión Especial que tenga como propósito investigar si los servidores públicos de nivel de Director General a Secretario de Estado, encargados de la gestión de la pandemia por SARS-COV-02 causante de la enfermedad de COVID-19, se han desempeñado conforme a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las leyes aplicables, en especial, en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el caso de los funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Salud, si han cumplido con las disposiciones de la Ley General de Salud.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el __ de febrero de dos mil veintiuno.

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

(rúbricas)

[*] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la Verdad en las Américas. Agosto 2014.